Señor:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

REF: Acción de tutela al derecho consagrado en los preceptos constitucionales al debido proceso, derecho a la defensa y otras violaciones que puedan a llegar a configurarse.

ACCIONANTE: MANUEL SALVADOR ROCHA SIMANCA

ACCIONADO: JUEZA SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO, LUCILA LEON ACEVEDO, JOVANY MACHADO OCHOA.

RADICADO ÚNICO: 08-001-31-53-006-2017-00266-00

RADICADO INTERNO: C6-0394-2019

PROCESO: EJECUTIVO ACUMULADO

DEMANDANTE: EDGAR FABIO CAMELO, CESIONARIA LUCILA LEÓN ACUMULADO: AIDER GUETTE, CESIONARIO JOSÉ JAVIER LOZANO

DEMANDADO: JOVANNY ENRIQUE MACHADO OCHOA

MANUEL SALVADOR ROCHA SIMANCA, identificado como aparece al pie de mi firma, por medio del presente escrito comparezco ante usted muy respetuosamente para que en cumplimiento del artículo 86 de la Constitución nacional y los decretos que la desarrollan declare tutelado mi derecho fundamental de petición y ordene se tomen las medidas necesarias para garantizarlo.

Esta solicitud tiene por razón los siguientes

HECHOS

1 En el juzgado segundo civil del circuito de ejecución de sentencia de Barranquilla se adelanta proceso identificado con el numero 08001315300620170026600 radicado interno C6-0394-2019 ejecutivo singular demandante EDGAR CAMELO

LEON contra JOVANY MACHADO OCHOA, proceso que se encuentra al despacho para remate o fijación en lista.

2 Dentro de este proceso se han presentado innumerables vicisitudes a lo largo de estos siete (7) años desde el 2016 momento en que se impetró la demanda, denuncias por fraude procesal, objeciones a todas las actuaciones, vulneración de derechos, vigilancia administrativa , entre otras.

3 Por ultimo secretaria de este despacho procede a solicitar avalúo catastral y además uno de los abogados de la parte demandante aporta otro avalúo y el extremo contrario solicita el catastral, habiendo pasado mas de 24 meses y este despacho no direcciona una línea clara para finalizar con esta etapa y darle cumplimiento a la sentencia del juzgado de origen, juzgado sexto civil del circuito de Barranquilla, dándose los presupuestos para soslayar en primer orden del debido proceso, no solo por las dilaciones contenidas dentro de este estadio procesal.

JOSÉ
JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA. -
E.S.D.

Referencia: Proceso ejecutivo de AIDER ROLANDO GUETTE CERVANTES
contra JOVANNY MACHADO OCHOA.

Radicación No. 08001-31-53-006-2017-00266-00

INTERNO: C6-0394-2019

LUIS GUILLERMO ORELLANOS CAMARGO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.129.570.619 expedida en Barranquilla, abogado titulado e Inscrito acreditado con la Tarjeta Profesional No. 211602 del C.S.J. en mi condición de apoderado Judicial en el proceso de la referencia del señor **JOSE JAVIER LOZANO MENDOZA** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.082.915.006 expedida en Santa Marta, me permito solicitar al despacho se sirva oficiar a la oficina de GESTION CATASTRAL de la ciudad de Barranquilla, dependencia adscrita a la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, para que expida el avalúo catastral del bien inmueble embargado y secuestrado en el presente proceso de propiedad del demandado JOVANNY MACHADO OCHOA ubicado en la carrera 41 No. 65 - 30 de la ciudad de Barranquilla identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-110491 para ser aportado en el proceso y de esta manera se determine el avalúo del inmueble y proceder a realizar el remate correspondiente.

Del señor Juez,

**AVALÚO COMERCIAL CONSOLIDADO
DE UN BIEN INMUEBLE**

Fecha de avalúo 3 de Abril de 2023
Interesados **A QUIEN INTERESE y/o JUZGADO 2º DE EJECUCION
2º DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO.Rad.00266-2017**
Apoderado: **RAFAEL ARTURO CASTRO GUERRERO
C.C.72007559 T.P. 143980 C.S.J.**
Demandante: **EDGAR FABIO CARMELO LEON C.C.1.129.570.204**
Propietario - Demandado: **JOVANNI ENRIQUE MACHADO OCHOA
C.C.72.210.114**
Dirección Carrera 41 No.65-30
Barrio y/o Urbanización El Recreo
Municipio Barranquilla -Atlántico
Tipo Urbano- Residencial- Comercial
Estrato 4 medio
Matricula inmobiliaria No.040-110491
Referencia catastral 01010000016000030000000000
Documentos Suministrados Certificado de tradición, estado de cuenta de impuesto
predial y otros.

Antes de rendir el presente avalúo del inmueble anteriormente referenciado, manifiesto muy respetuosamente lo siguiente:

MI IDONEIDAD:

1. GENERALIDADES DE LEY:

Mi nombre es **ADOLFO RAPALINO MENDOZA**, varón, mayor de edad,

Barranquilla, 31 de julio de 2023

RADICADO ÚNICO : 08001315300620170026600
RADICADO INTERNO : C6-0394-2019
PROCESO : EJECUTIVO
DEMANDANTE : JOSE JAVIER LOZANO MENDOZA.
DEMANDADO : JOVANNY ENRIQUE MACHADO OCHOA.
JUZGADO DE ORIGEN : SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL:

Señora Jueza Segunda Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, pasa a su despacho el presente proceso con memorial.

Datos del Memorial

1	Fecha	27-07-2023
	Solicitud	Avalúo catastral

Datos de la Ubicación

1	Cuaderno	01PrimerInstancia // 01DemandaPrincipal // C02MedidasCautelares
	Consecutivo	106

Lo anterior debido a que el proceso se encuentra en su despacho.

Sírvase proveer.

Es decir, que pasados esta cantidad de meses, mas de 36 y teniendo en cuenta el tiempo que se han cumplido con la ritualidad establecida, el despacho no visualiza el norte para ser determinante y cumplir con sus obligaciones legales.

Nuestro ordenamiento establece para señalamiento de fecha para remate que *“ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, el ejecutante podrá pedir que se señale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito. En firme esta, cualquiera de las partes podrá pedir el remate de dichos bienes.*

Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra autos que hayan decidido sobre desembargos o declarado que un bien es inembargable o decretado la reducción del embargo,

no se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos. Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.*

En el auto que ordene el remate el juez realizará el control de legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad. En el mismo auto fijará la base de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) del avalúo de los bienes.

Así las cosas tenemos entonces el establecimiento de la norma para estos casos y la singularidad de este proceso haciendo agache a lo ordenado por el artículo 457 del código general del proceso y la norma superior de colofón.

DERECHOS VULNERADOS

Derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

MEDIDA PROVISIONAL

Solicito para no causar daño irremediable y se sustraiga el principio de economía procesal, teniendo en cuenta que se pudiera retrotraer más adelante todas las actuaciones por alguna nulidad, se ordene suspender toda actuación judicial dentro de este proceso referido sin que antes se pronuncie el despacho, dirima y sienta el orden de ejecución dentro de la finalización y última etapa del proceso descrito.

PROCEDENCIA DE TUTELA

Esta petición de tutela la considero procedente por las siguientes razones:

De acuerdo con el pronunciamiento, la Corte Constitucional, a partir de la [Sentencia C-590 del 2005](#), desarrolló un criterio conforme al cual el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se configuraba cuando la actuación judicial incurría en una

desviación de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de dicha calidad.

En desarrollo de lo expuesto, estableció algunos requisitos para que los funcionarios judiciales determinen cuándo una acción de tutela es procedente contra una decisión judicial, los cuales, en esta oportunidad han sido unificados:

1. Cuando el asunto tenga relevancia constitucional.

Es importante recordarlo porque en toda vulneración se recurre a este derecho porque afecta la forma de vivir de una persona., el cobro injusto de un valor económico como en el caso que nos ocupa, la falta al debido proceso que como consecuencia de la desatención al ritual procesal, más aún cuando se hace la observación al Juez tutelado por parte del demandante de las falencias e incongruencias en el debido proceso, a la falta de defensa técnica, al derecho de controvertir que se soslayó , constituyen faltas a la dignidad humana y así sucesivamente durante todo el proceso civil hasta llegar a los juzgados de ejecución civil, Juez tutelado.

2. Cuando el interesado haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela.

4. En caso de tratarse de una irregularidad procesal, cuando esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales.

Cuando el accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible

La misma sentencia de constitucionalidad precisó que si en un caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, debe también acreditarse que se ha configurado un defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico o un error inducido O bien, que se trate de una decisión sin motivación, o en la que se ha desconocido un precedente constitucional y una violación directa a la Constitución, defecto de una decisión sin motivación tal como ocurre en el auto que niega la procedencia del incidente de nulidad.

(Corte Constitucional, Sentencia SU-297, may. 21/2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero)

En nuestro Estado de social de derecho, resulta imprescindible que los funcionarios judiciales justifiquen sus decisiones de manera razonada, lo que evita las posiciones arbitrarias y caprichosas. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia: "...Los jueces de derecho no somos soberanos en nuestras actuaciones, sino que por el contrario estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley y en obediencia a una y otra norma nuestros fallos no pueden ser el resultado de una vocación caprichosa, sino de consideraciones que estén atemperadas a las providencias constitucionales y legales."

La corte constitucional sobre el particular ha dicho: "Los jueces deben fundamentar sus decisiones, no en criterios ad – hoc, caprichosos y coyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro. Y es que no puede ser de otra forma, pues de los jueces se espera que resuelvan adecuadamente los conflictos, pero no de cualquier manera, sino con fundamento en las prescripciones del ordenamiento.

El juez debe entonces hacer justicia en el caso concreto pero de conformidad con el derecho vigente, por lo cual tiene el deber mínimo de precisar la regla o el principio que sirve de base a la decisión concreta (...) Por ende, la existencia de una ratio decidendi en una sentencia resulta de la necesidad de que los casos no sean decididos caprichosamente sino con fundamento en normas aceptadas y conocidas por todos, que es lo único que legitima en una democracia el enorme poder que tiene los jueces - funcionarios no electos- de decidir sobre la libertad, los derechos y los bienes de las otras personas"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales

se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se trate "dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar "reglas y procedimientos" de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas.

Igualmente en la sentencia C-763 de 2009, la Corte indicó que esa libertad de configuración del Legislador en materia procesal, se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad:

“Sin embargo, esta potestad no es absoluta y se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de justicia. Específicamente, ha dicho la jurisprudencia que el legislador debe garantizar, en todos los procesos judiciales y administrativos, las garantías constitucionales que conforman la noción de “debido proceso”. En este sentido ha expresado:

“El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).

Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83).

En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte tiene establecido que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, “la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la

ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”

Acudo ante su Despacho para solicitar la protección del derecho mencionado anteriormente.

EFFECTOS DE LA TUTELA

Los efectos de la tutela: pese a tener motivos que justifiquen la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente, pues estos tienen una expectativa legítima a que se proteja su seguridad jurídica, precisó la Sala (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-391, jul.27/16

PROCEDENCIA DE TUTELA

Esta petición de tutela la considero procedente por las siguientes razones:

1. El derecho solicitado es declarado como fundamental por la Constitución Nacional.
2. No dispongo de otro medio de defensa judicial y se han respetado las competencias asignadas a las autoridades judiciales, no existiendo desarticulación y la trasgresión del principio de seguridad jurídica.
3. No existe ni cuento con otros medios de defensa ante la vulneración de los derechos trasgredidos.

PRUEBAS

Aporto como pruebas:

LINK EXPEDIENTE JUDICIAL :

https://etbcsl-my.sharepoint.com/personal/ofejccba_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fofejccba%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FProcesos%20Digitalizados%20OFAPJECCB%2FC6%2D0394%2D2019&ga=1

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he adelantado otra Acción de Tutela respecto a los mismos hechos y derechos.

SOLICITUD DE PROTECCION DE DERECHO

De manera muy respetuosa le solicito que en el fallo se tutele el derecho fundamental de petición, ORDENE la protección del derecho vulnerado y la suspensión hasta tanto no se tomen las medidas pertinentes para la salvaguarda del derechos,

ANEXOS

1. Los documentos relacionados como prueba.
2. Copia de esta Acción de Tutela y sus anexos.

NOTIFICACIONES

El accionante

en carrera 41 N° 65 -30 barranquilla -DIEP

Tel: 300 4850032

Correo electrónico: mariosimanrocha05@gmail.com

Los accionados.

Juzgado segundo civil del circuito de ejecución de sentencias de Barranquilla :
Calle 40 No. 44-80 Edificio Centro Cívico – Piso 5

PBX. 3885005 Ext. 1120. www.ramajudicial.gov.co

Correo Electrónico: ofejccba@cendoj.ramajudicial.gov.co

AIDER GUETTE, CESIONARIO JOSÉ JAVIER LOZANO, apoderado: Dr. LUIS GUILLERMO ORELLANO CAMARGO.

Correo electrónico: orellanosluis@gmail.com

EDGAR FABIO CAMELO, CARRERA 55 No 91-147, CESIONARIA LUCILA LEÓN, apoderado Dr. RAFAEL CASTRO G

Correo electrónico: legaladviceoficce@gmail.com

Atentamente,

MANUEL SALVADOR ROCHA SIMANCA
C.C No. 72.247.819 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA